



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria [CTSAT], correspondiente al once de noviembre de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES

I. Solicitud de acceso a la información 330027724002869:

Con fecha diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia la solicitud de acceso a la información con número de folio 330027724002869, mediante la cual se requirió lo siguiente:

"Acorde al derecho a la información: investigando la empresa con denominación [...] empresa extranjera [...] con representación de los señores [...] y [...], se ha detectado que esta percibe rentas c y no las declara ante el SAT y por lo cual se predispone a lavado de dinero y corrupción como ustedes dicen, y enriqueciéndose esto lo llevan realizando desde los 90's hasta la fecha impunemente, se sabe que es una empresa que no nada más se dedica a la [...] en el centro de la ciudad de México, pose estacionamientos y tiene propiedades en renta sin declarar y teniendo otros giros que no corresponden a los especificados por la CDMEX, [a los mexicanos se le ha despojado ilícitamente de sus propiedades por parte de los representantes de esta empresa haciéndose pasar por dueños y con engaños al grado de utilizar servidores públicos para estos fines], a los ciudadanos mexicanos se les pide un límite de depósitos, declaraciones de impuestos, informe de ingresos etc., mientras este tipo de empresa como [...] y representada por los señores [...] y [...] se la llevan tranquilamente sobornando, lavando dinero, no declarando lo que no les conviene ante el SAT, teniendo negocios muy generosos, dañando la economía del país, SE DESEA SABER SI YA ES INVESTIGADA ESTA EMPRESA POR TODOS LOS ILÍCITOS QUE SE DISFRAZAN COMO "EMPRESA RESPONSABLE Y QUE DAN EMPLEO" O PODRÍA PROPORCIONAR SI YA HAY UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SE LE AGRADECE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE A UN CIUDADANO QUE DECLARA SUS INGRESOS Y PAGA IMPUESTOS ANTE EL SAT y secretaria de Finanzas." [sic]

- II. **Turno:** La Unidad de Transparencia [UT], con base en la competencia, funciones y atribuciones de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria [SAT], estimó procedente turnarla a la Administración General Jurídica [AGJ] y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal [AGAFF].
- III. **Respuesta de las Unidades Administrativas consultadas:** La AGJ a través de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales, así como, la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal adscrita a la AGSC, mediante oficio sin número de fecha treinta de octubre de dos mil veinticuatro, manifestaron su respuesta en los siguientes términos:

"[...] Consideración previa.

En principio, del análisis a la solicitud se advierte que se trata de preguntas las cuales no encuadran con los supuestos de acceso a la información contenidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGTAIP].



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Lo anterior tiene relación con lo publicado en el portal electrónico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde se indica ¿Qué es una solicitud de acceso a la información pública?, tal como se describe a continuación:

Solicitud de Información Pública

¿Qué es una solicitud de acceso a información pública?

Es un escrito que las personas presentan ante las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, por el que pueden requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus archivos.

En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona."¹

Énfasis añadido

En ese sentido, los cuestionamientos formulados a manera de solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, no constituyen la petición de acceso a un documento. De igual manera, resulta importante establecer que, la LGTAIP dispone que **los sujetos obligados deben otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentren.**

Ello es así, toda vez que el artículo 3 de la citada Ley dispone, en su fracción VII, lo que debe entenderse por Documentos, señalando lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

[...]

VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

[...]"

Énfasis añadido

Asimismo, resulta importante considerar lo dispuesto en la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la LGTAIP de fecha 1o. de diciembre de 2014 publicada en la Gaceta del Senado el 2 de diciembre del mismo año, misma que en la parte que interesa establece lo siguiente:

"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

[...]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¹ https://home.inai.org.mx/?page_id=1643



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

INTRODUCCIÓN

[...]

Objetivos de la Ley

Se propone definir los objetivos de la Ley, a fin de dejar claro los propósitos que sus disposiciones buscan alcanzar, como lo son: a) Establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos obligados;

[...]

Principio de documentar la acción gubernamental

[...]

Es así, que para hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental y poder acceder debidamente a la información pública gubernamental, y de cuya efectividad son protagonistas en primera instancia los propios Sujetos Obligados, es que su actuar comprende de manera esencial la conservación de sus archivos documentales.

La regla es la obligación del sujeto obligado a fin de atender una solicitud no se traducirá en contestar preguntas, sino en dar acceso a aquellos documentos fuente que permitan conocer u obtener la información del interés del particular.

[...]"

Énfasis añadido

De lo antes transcrito, se concluye que el sujeto obligado deberá dar acceso a aquellos documentos que genere con motivo del ejercicio de sus facultades, y que permitan conocer u obtener la información del interés del particular, con la limitante de que dicha obligación no se traducirá en contestar preguntas formuladas por el ciudadano.

Incompetencia.

Una vez precisado lo anterior, respecto de la parte de la solicitud relativa a:

"[...] SI YA ES INVESTIGADA ESTA EMPRESA POR TODOS LOS ILÍCITOS QUE SE DISFRAZAN COMO "EMPRESA RESPONSABLE Y QUE DAN EMPLEO" [...]"

Al respecto, se informa que la **Administración General Jurídica [AGJ]** a través de la **Administración Central de Asuntos Penales y Especiales**, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XXXVI² en correlación con el artículo 36, Apartado E, fracción I³, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria [RISAT].

En ese sentido, se informa que, la **AGJ no es competente** para investigar los hechos constitutivos de delito, por lo que no es posible proporcionar la información solicitada.

En ese orden de ideas, se advierte que el marco normativo que regula las atribuciones conferidas a dicha Administración General, no contempla la generación de la información referente al rubro que requiere el

² Artículo 35.- Compete a la Administración General Jurídica:

[...]

XXXVI. Formular las denuncias, querrelas, declaratorias de que el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir perjuicio, por hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables; denunciar o querrelarse en aquellos hechos u omisiones que puedan constituir delitos de los contemplados en el Código Penal Federal y otros ordenamientos legales, cuando dichas acciones no correspondan a la competencia de otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, tratándose de hechos u omisiones que puedan constituir delitos en que el Servicio de Administración Tributaria resulte afectado o aquéllos de que tenga conocimiento o interés, así como coadyuvar en los supuestos anteriores con el agente del Ministerio Público de la Federación competente y designar asesores jurídicos en el procedimiento penal;

[...]

³ Artículo 36.- Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General Jurídica ejercer las atribuciones que a continuación se señalan:

[...]

E. A la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente:

I. Administración Central de Asuntos Penales y Especiales, las señaladas en las fracciones X, XII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX del artículo 35 de este Reglamento;

[...]

**Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria**

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

solicitante, por lo tanto, la elaboración y procesamiento de dicha información no deriva del ejercicio de facultades inherentes a la AGJ, en consecuencia, resulta incompetente para atender la solicitud de acceso a la información referida.

Lo expuesto, encuentra apoyo en el criterio SO/013/2017⁴ del INAI, que es del tenor siguiente: **"Incompetencia.** La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara."

En ese contexto, con el ánimo de coadyuvar a la transparencia y en aras de garantizar su derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad de la información, se hace de su conocimiento que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5^º de la Ley de la Fiscalía General de la República, corresponde al Ministerio Público de la Federación de la **Fiscalía General de la República (FGR)**, la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales; por lo que se le sugiere canalizar su requerimiento a la Unidad de Transparencia (UT) de la FGR; en tal virtud se proporcionan los datos de contacto siguientes:

Unidad de Transparencia FGR				
Teléfono y extensión	Correo electrónico	Domicilio	Nombre del responsable	Cargo
5553460000 Exts. 505792	leydetransparencia@fgr. org.mx	Avenida De los Insurgentes No. 20, Planta Baja, Colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06700	Licenciada Adi Loza Barrera	Responsable de Transparencia.

O bien, si lo desea puede ingresar al portal de la Plataforma Nacional de Transparencia y seleccionar el icono de solicitudes:

[Plataforma Nacional de Transparencia \(plataformadetransparencia.org.mx\)](http://plataformadetransparencia.org.mx)

Competencia.

Ahora bien, por la parte de su solicitud consistente en:

⁴ Criterio SO/013/2017

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.

Resoluciones

RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.

RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.

⁵ Artículo 5. Al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente Ley, y las demás disposiciones legales aplicables.

La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024
Folio: 330027724002869
RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

"[...] PODRÍA PROPORCIONAR SI YA HAY UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. [...]"

Primero. Le informo que su solicitud fue turnada a la AGJ, a través de la ACAPE de conformidad con el artículo 36, Apartado E, fracción I⁶, en concordancia con el artículo 35, fracción XXXVI⁷ del RISAT, unidad administrativa competente del SAT, para realizar acciones de carácter penal, por hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, así como por hechos u omisiones que puedan constituir delitos de los contemplados en el Código Penal Federal y otros ordenamientos legales en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resulte afectado, de los cuales es competente.

Así también, de acuerdo con el artículo 37⁸, en relación con el artículo 35, fracción XXXVI⁹ del RISAT, las **Administraciones Desconcentradas Jurídicas (ADJ's)** adscritas a la AGJ, igualmente cuentan con facultades para realizar acciones de carácter penal, por hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, así como por hechos u omisiones que puedan constituir delitos de los contemplados en el Código Penal Federal y otros ordenamientos legales en que el SAT resulte afectado, de los cuales es competente.

Análisis.

Al respecto, se informa que, en términos generales no es posible emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas plenamente identificada en la solicitud, presentados por la ACAPE y las ADJ's, adscritas a la AGJ, conforme al ámbito de su competencia, en términos del artículo 92¹⁰ del Código Fiscal de la Federación (CFF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), mucho menos las carpetas de investigación, en caso de que existiera; en razón de tratarse de datos que pueden formar parte de los registros de investigación, los cuales son estrictamente reservados, al igual que todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, y únicamente las partes pueden tener acceso a los mismos y para efectos de acceso a la información pública gubernamental,

⁶ Transcrito con anterioridad.

⁷ Transcrito con anterioridad.

⁸ Artículo 37.- Compete a las administraciones y subadministraciones desconcentradas jurídicas, ejercer las atribuciones que a continuación se señalan:

I. A las administraciones desconcentradas jurídicas, las señaladas en las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XL del artículo 35 de este Reglamento, así como analizar de oficio o previa solicitud de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, que los actos administrativos dirigidos de manera individual a contribuyentes, que emitan las administraciones desconcentradas de las otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, cumplen con las referidas formalidades, a fin de evitar vicios en dichos actos y procedimientos administrativos, y

II. A las subadministraciones desconcentradas jurídicas, las señaladas en las fracciones XI, XII, XIV, XV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XL del artículo 35 de este Reglamento.

Las administraciones desconcentradas jurídicas estarán a cargo de un Administrador Desconcentrado, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores desconcentrados jurídicos, así como por los jefes de departamento, notificadores, ejecutores y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

⁹ Transcrito con anterioridad.

¹⁰ Artículo 92.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos.

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Formule querrela, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.

II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los artículos 102, 103 y 115.

III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.

En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal.

Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura, y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales.

En los delitos fiscales en que sea necesaria querrela o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querrela. La citada cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este Código, para efectos de lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.

Al resolver sobre las providencias precautorias la autoridad competente tomará como base la cuantificación anterior, adicionando la actualización y recargos que haya determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se ordene la providencia. En caso de que el imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo monto que correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida esta sea citada para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva a favor del Fisco Federal.

Para efectos de la condena a la reparación del daño, la autoridad competente deberá considerar la cuantificación referida en este artículo, incluyendo la actualización y los recargos que hubiere determinado la autoridad fiscal a la fecha en la que se dicte dicha condena. En caso de que el imputado hubiera pagado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del imputado, podrá considerar dicho pago para efecto de la determinación de providencias precautorias, la imposición o modificación de las medidas cautelares.

Se consideran mercancías los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreducibles a propiedad particular.

Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a los límites mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones, pero ello solo podrá ocurrir una vez que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate a partir de que dicha determinación quede firme¹¹.

De igual forma, el artículo 105, del Código Nacional de Procedimiento Penales establece quienes son los sujetos del procedimiento penal, señalando en su fracción I, a la víctima u ofendido, carácter que tiene reconocido el SAT dentro del procedimiento penal y juicio en cualquiera de sus etapas [investigación inicial o complementaria, intermedia o de juicio] acorde con el artículo 92¹² del CFF, en relación con el artículo 35, fracción XXXVI¹³ del RISAT, teniendo la obligación de guardar reserva de los registros de la investigación de conformidad con lo señalado en el artículo 106 del referido ordenamiento legal, mismo que establece que en ningún caso se puede hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal, precisando que la violación a la reserva será sancionada por la legislación aplicable.

En ese sentido, los requisitos de procedibilidad presentados ante la FGR y las carpetas de investigación, en caso de que existieran, al encontrarse contenidos dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señala como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público, la información contenida en los mismos tiene el carácter de reservada.

Bajo esas circunstancias debe decirse que, en el esquema de nuestro sistema constitucional, el derecho de acceso a la información encuentra cimiento a partir de lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, fracción I¹⁴, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], cuyo contenido deja claro que, en principio, todo acto de autoridad [todo acto de gobierno] es de interés general y, por ende, es susceptible de ser conocido por todos.

Sin embargo, como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de acceso a la información no puede caracterizarse como uno de contenido absoluto, en tanto su ejercicio se encuentra acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes, así como frente al necesario tránsito de las vías adecuadas para ello¹⁵.

Así precisamente en atención al dispositivo constitucional antes referido, se obtiene que la información que tienen bajo su resguardo los sujetos obligados del Estado encuentra como excepción aquella que sea temporalmente reservada o confidencial en los términos establecidos por el legislador federal o local, cuando de su propagación pueda derivarse perjuicio por causa de interés público y seguridad nacional.

¹¹ Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¹² Transcrito con anterioridad.

¹³ Transcrito con anterioridad.

¹⁴ Artículo 6o.

[...]

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información, [...]

¹⁵ DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiere; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. Época: Novena Época. Registro: 191967. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional Tesis: P. LX/2000. Página: 74)



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Junto a la identificación de los supuestos bajo los cuales deberá reservarse la información, y con el ánimo de proyectar a cabalidad el principio constitucional que les da sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LFTAIP], en sus artículos 102¹⁶ y 103¹⁷, exige que, en la definición sobre su configuración, además de la realización de un examen casuístico y de justificación fundado y motivado, se desarrolle la aplicación de una prueba de daño; entendido esto como el estándar que implica ponderar la divulgación de la información frente a la actualización de un daño.

Atento a lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por la normativa en materia de transparencia y acceso a la información, y conforme al cuadro que a continuación se acompaña, se declara su clasificación en los siguientes términos:

Información	Clasificación
Pronunciamiento respecto de la existencia de carpetas de investigación en contra de la persona moral o relacionadas con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud.	Reservada.- En virtud de que obstruye la persecución de los delitos, asimismo, se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, aunado a que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, por lo que revisten el carácter de reservado conforme el artículo 110, fracciones VII, XII y XIII ¹⁸ , de la LFTAIP en correlación con el artículo 113, fracciones VII, XII y XIII ¹⁹ , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGTAIPI].

Clasificación de la información: Reservada.

1
d

¹⁶ Artículo 102. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

¹⁷ Artículo 103. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

¹⁸ Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[...]

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

[...]

¹⁹ Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[...]

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

2

**Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria**

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Bajo esa premisa, la información descrita en el cuadro inserto anterior, se clasifica como **RESERVADA** de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103²⁰, 104²¹, 106, fracción I²², 107²³, 113, fracciones VII, XII y XIII²⁴ y 114²⁵, de la LGTAIP; 97²⁶, 98, fracción I²⁷, 100²⁸, 102²⁹, 105³⁰, 110, fracciones VII, XII y XIII³¹, 111³² y 140³³, de la LFTAIP; así como los numerales Vigésimo sexto³⁴, Trigésimo primero³⁵, Trigésimo segundo³⁶, Trigésimo tercero³⁷ y Trigésimo cuarto³⁸, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de que en el supuesto no concedido de que se cuente con carpetas de investigación, en contra de la persona moral o relacionadas con las personas físicas identificadas en la solicitud, se trataría de información contenida en asuntos cuya difusión obstruye la persecución de los delitos, asimismo, se encontraría contenida dentro de investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, aunado a que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, por lo que revisten el carácter de reservado; consecuentemente no es de naturaleza pública.

²⁰ Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

²¹ Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

²² Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

[...]

²³ Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

²⁴ Transcrito con anterioridad.

²⁵ Artículo 114. Los causales de reserva previstos en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

²⁶ Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además de lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información previstas en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad

previstos en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley General.

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

²⁷ Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

[...]

²⁸ Artículo 100. Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo de reserva.

²⁹ Transcrito con anterioridad.

³⁰ Artículo 105. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

³¹ Transcrito con anterioridad.

³² Artículo 111. Los causales de reserva previstos en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General.

³³ Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

I. Confirmar la clasificación;

II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y

III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la presente Ley.

³⁴ Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión,

o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y

III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

³⁵ Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación,

durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

³⁶ Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley le otorgue tal carácter siempre que no contravenga las bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley General o las previstas en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter y acreditar la afectación que la divulgación de la información traería a los fines por lo que se reserva la información.

³⁷ Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

I. Se deberá fundar la clasificación, al citar la fracción y la hipótesis de la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;

II. Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional;

III. Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generará un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate;

IV. Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generará un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;

V. Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes;

VI. En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.

³⁸ Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podrá reservarse la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que por primera vez el Comité de Transparencia confirme la clasificación respectiva.

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido.

Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de reserva determinado, mismas que deberán estar relacionadas y sustentadas en la prueba de daño.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.



Es así que en cumplimiento a lo previsto en los artículos 102³⁹ y 103⁴⁰, de la LFTAIP, se manifiesta la aplicación de una prueba de daño; entendido esto como el estándar que implica ponderar la divulgación de la información frente a la actualización de un daño, por lo que se establece lo siguiente:

PRUEBA DE DAÑO

Se tiene que la sola divulgación del pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad, en el caso de que existieran, en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas plenamente identificada en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, representaría en cualquier sentido, la obstrucción de la persecución de los delitos, la vulneración de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público e infringir la disposición expresa de una ley, por lo que dicha información, reviste el carácter de reservada conforme el artículo 110, fracciones VII, XII y XIII⁴¹, de la LFTAIP, por un periodo de 5 años en términos del artículo 99, segundo párrafo⁴², del ordenamiento legal citado.

Es así que, en cumplimiento a lo previsto por el numeral Trigésimo tercero⁴³ de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se indica que la información solicitada reviste el carácter de reservada, por lo que se manifiesta lo siguiente:

Cita de las fracciones y las hipótesis de las causales aplicables del artículo 113⁴⁴, de la LGTAIP, así como su vinculación con los numerales específicos, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente otorga el carácter de información reservada.

- Causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción VII⁴⁵ de la LGTAIP y 110, fracción VII⁴⁶, de la LFTAIP.

Se acredita que la difusión de la información requerida obstruye la persecución de los delitos, pues obstaculiza las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, incluso puede menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Es así que se justifica el supuesto de reserva, dado que se actualizan los elementos precisados en el numeral Vigésimo sexto⁴⁷ de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, conforme a lo siguiente:

³⁹ Transcrito con anterioridad.

⁴⁰ Transcrito con anterioridad.

⁴¹ Transcrito con anterioridad.

⁴² Artículo 99. Los documentos clasificados como reservados serán desclasificados cuando:

[...]

La información clasificada como reservada, según el artículo 110 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.

[...]

⁴³ Transcrito con anterioridad.

⁴⁴ Transcrito con anterioridad.

⁴⁵ Transcrito con anterioridad.

⁴⁶ Transcrito con anterioridad.

⁴⁷ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

En el supuesto no concedido de que se hubieran presentado requisitos de procedibilidad con las características que se precisan en la solicitud, se trataría de requisitos que se presentan ante la FGR sustentados con información proporcionada por el SAT, que llega a formar parte de las carpetas de investigación, en el caso de que existieran, a cargo del Agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que se acreditaría la existencia de carpetas de investigación en trámite, en las que se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba que conllevan el sustento del ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

De proporcionarse lo requerido, se permitirá identificar las carpetas de investigación en trámite, en el caso de que existieran, por lo que se acreditaría el vínculo que concurriría entre la información solicitada y las carpetas de investigación abiertas con motivo de los requisitos de procedibilidad presentados por el SAT.

En ese tenor, como pudiera tratarse de carpetas de investigación en trámite, su difusión podría impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público de la Federación, durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales, con motivo del ejercicio penal, ya que terceros podrían tratar de influir en dichas carpetas de investigación, de acuerdo a sus intereses.

- **Causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción XII⁴⁸, de la LGTAIP y 110, fracción XII⁴⁹, de la LFTAIP.**

Sobre el alcance del contenido de los artículos 113, fracción XII⁵⁰, de la LGTAIP y 110, fracción XII⁵¹, de la LFTAIP, debe señalarse que en virtud de la clasificación del pronunciamiento respecto de requisitos de procedibilidad presentados ante la FGR, en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas o plenamente identificadas en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, en el supuesto no concedido de que existieran, en principio, dicha información revestiría el carácter de reservada, ya que su difusión permitiría identificar carpetas de investigación correspondientes a requisitos de procedibilidad presentados por el SAT, las cuales están siendo integradas por el Ministerio Público de la Federación y contienen los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que se acreditan los requisitos establecidos por el numeral Trigésimo primero⁵², de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

- **Causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción XIII⁵³, de la LGTAIP y artículo 110, fracción XIII⁵⁴, de la LFTAIP.**

Conforme el artículo 218⁵⁵ del Código Nacional de Procedimientos Penales [CNPP] los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los

⁴⁸ Transcrito con anterioridad.

⁴⁹ Transcrito con anterioridad.

⁵⁰ Transcrito con anterioridad.

⁵¹ Transcrito con anterioridad.

⁵² Transcrito con anterioridad.

⁵³ Transcrito con anterioridad.

⁵⁴ Transcrito con anterioridad.

⁵⁵ Artículo 218. Reserva de los actos de investigación



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados y únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos.

En ese sentido, la información relativa a los registros que permitan identificar las carpetas de investigación, se encuentra reservada por ministerio del Código Nacional citado, por lo que se cumple con el requisito señalado en el numeral Trigésimo segundo⁵⁶ de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

En apoyo a lo anterior, se alude la tesis aislada cuyo contenido dispone:

“Época: Décima Época
Registro: 2016068
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 50, Enero de 2018, Torno IV, página 2036
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: I. lo.P.89 P (10a.)

ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL O SU EQUIVALENTE LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarle; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial [en la que se formula la imputación]. Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público Federal o su equivalente en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesarias- realiza el órgano persecutor [Ministerio Público Federal o su equivalente] durante la

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

⁵⁶ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público Federal o su equivalente así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa."

Énfasis añadido

Ponderación de intereses en conflicto.

Al respecto, de dar a conocer la información contenida en las carpetas de investigación, se generaría un riesgo de perjuicio, pues se vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente, ya que, bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al investigado o a sus cómplices, o bien, provocar alteración o destrucción de los objetos del delito, que se encuentren relacionados con las carpetas de investigación, o realizar acciones que puedan entorpecerlas.

Es así que la reserva manifestada atiende a un interés jurídico superior para toda la sociedad, y supera el interés particular de acceso del solicitante, pues como ya se mencionó, la información requerida constituye los datos que podrían identificar las carpetas de investigación que corresponden a denuncias presentadas, que se tramitan ante el Ministerio Público de la Federación, en el supuesto no concedido de que existieran, por lo que prevalece el interés fiscal de la Federación.

Se estima que el interés público se traduce en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, por lo que prevalece respecto del derecho de acceso a la información de un gobernado.

Vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico de que se trate.

El emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad presentados por el SAT en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, en el caso de que existiera, el interés jurídico tutelado es el interés fiscal de la Federación, pues éste busca que, de determinarse procedente el ejercicio de la acción penal, se impongan sanciones con motivo de la comisión de delitos.

Es así que, de proporcionarse la información contenida en las carpetas de investigación en general, se podría afectar el resultado que se obtenga de una investigación en trámite, así como de los procedimientos que puedan aperturarse.

Razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable.



- **Riesgo real.**

El riesgo real fundamental que justifica la restricción de información reside en el interés colectivo del Estado de prevenir, investigar, perseguir y castigar los delitos cometidos en la sociedad; dado que la importancia de mantener el orden social, en específico por lo que a conductas criminales se refiere, es una condición de existencia de la vida e integridad física, pues sin él no podrían desarrollarse éstas.

Ahora bien, de darse a conocer la información solicitada, en el supuesto no concedido de que existiera, se podrían conocer los elementos que considera la autoridad, para la integración de los expedientes correspondientes, lo que derivaría en que los contribuyentes realicen estrategias y planeaciones para obstruir la persecución de los delitos fiscales.

Asimismo, el Ministerio Público de la Federación es el único que puede hacer del conocimiento del investigado o imputado la existencia de una investigación en su contra para que pueda ejercer su defensa, por lo que, dicha información no puede ser proporcionada a terceros, debido a que incluso el artículo 218⁵⁷ del CNPP establece la restricción a su acceso.

Así, tenemos que el fin constitucionalmente buscado con la reserva en las carpetas de investigación, consiste en que el Estado Mexicano prevenga, investigue, persiga y castigue los delitos cometidos; y sólo con base en aquella, se puede determinar la razonabilidad de la restricción al Derecho Humano de acceso a la información pública.

- **Riesgo demostrable.**

La difusión del pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad presentados ante la FGR en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación representa un riesgo demostrable, ya que puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público de la Federación durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal y, en consecuencia, el éxito de su investigación.

Lo anterior, debido a que las carpetas de investigación contienen información a la cual no puede tener acceso cualquier individuo, así como datos personales de la persona que se investiga y de quien presentó la denuncia [víctima u ofendido], en virtud de ser estrictamente reservada, por lo que el agente del Ministerio Público de la Federación es quien, por los conductos correspondientes hará del conocimiento oportuno del investigado, a fin de no afectar su derecho de defensa.

Asimismo, representa un riesgo demostrable emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, al comprometerse la integridad moral de las personas que se investiga en las mismas, ello en el supuesto no concedido de que existieran; esto es, si bien es cierto la denuncia con la que da inicio la carpeta hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la fase de investigación inicial, dichos datos tienen que ser corroborados

⁵⁷ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

mediante los actos de investigación que ordene el representante social de la federación, a fin de no comprometer la imagen, reputación y derechos fundamentales de las personas.

En el mismo sentido, el riesgo se hace extensible a la información de la persona que posiblemente se presentó requisito de procedibilidad, del cual se debe resguardar su identidad y otros datos personales; por lo que únicamente las partes involucradas pueden tener acceso a la información relacionada con los expedientes que tiene su origen en dichos requisitos presentados por éste Órgano Desconcentrado.

- **Riesgo identificable.**

Radica que al dar a conocer cualquier información relacionada con las carpetas de investigación que tienen su origen en los requisitos de procedibilidad presentados por el SAT, personas relacionadas con las mismas o terceros pueden impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público de la Federación durante la etapa de investigación, así como alterar, destruir evidencias e incluso sustraerse de la justicia.

Asimismo, el principio de presunción de inocencia garantizado por la Constitución refiere que la persona acusada de haber cometido un delito es inocente hasta en tanto se demuestre lo contrario; en ese sentido el difundir datos que hagan identificable los expedientes y datos relacionados con motivo de requisitos de procedibilidad presentados por este Órgano Desconcentrado, afecta moralmente a las personas que están siendo investigadas, las cuales pueden ser objeto de señalamientos y discriminación.

De igual manera, los datos de la víctima u ofendido, contenidos en los registros de la carpeta de investigación deben de salvaguardarse de personas ajenas a la misma, protegiendo así su integridad.

Acreditación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño.

Se estima que, al tratarse de carpetas de investigación en trámite, en el supuesto no concedido de que existieran, su difusión puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público de la Federación, durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales, con motivo del ejercicio penal, ya que terceros podrían tratar de influir en dichas carpetas de investigación, de acuerdo a sus intereses.

Aunado a que los requisitos de procedibilidad forman parte de las carpetas de investigación que resultan de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

En tal virtud, el daño que ocasiona la difusión de la información solicitada es que se puede poner al descubierto datos de las carpetas de investigación a las cuales únicamente puede tener acceso la víctima u ofendido y el investigado en tanto se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, ello por disposición expresa del artículo 218⁵⁸ del CNPP, porque dicho precepto establece que en la etapa de investigación inicial, como anteriormente se comentó, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en las carpetas son estrictamente reservados para las partes.

En abono a lo anterior, es claro advertir que la difusión del contenido de las carpetas de investigación, permitiría que terceros ajenos a la investigación pudieran conocer las particularidades de los eventos

⁵⁸ Transcrito con anterioridad.

**Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria**

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

delictivos, probables responsables, testigos y/o diligencias de investigación practicadas; sino además podría alentarse a los probables responsables propiciando su sustracción de la acción de la justicia; podría ocasionar el entorpecimiento de nuevas diligencias; podría poner en riesgo a testigos; se transgrediría el derecho de presunción de inocencia de los investigados y pondría en riesgo a la víctima [SAT] para recibir la reparación del daño correspondiente.

Excepción al acceso a la información menos restrictivo.

Por lo anterior, la reserva respecto de emitir pronunciamiento sobre la existencia de requisitos de procedibilidad en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, en el supuesto no concedido de que existieran; se trata de información contenida en los requisitos de procedibilidad presentados ante la FGR y se relacionan con las carpetas de investigación que dieron origen a las mismas, es proporcional y adecuada al interés público, consistente en que el Estado Mexicano prevenga, investigue, persiga y castigue los delitos que lesionan de manera grave los bienes jurídicos de las personas por lo cual, se puede determinar la razonabilidad de la restricción al Derecho Humano de acceso a la información pública.

Razones por las cuales se estableció el plazo de reserva.

Es así que, en atención a lo establecido por el artículo 99, segundo párrafo⁵⁹, de la LFTAIP y numeral Trigésimo cuarto, último párrafo⁶⁰ de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se determina que la reserva temporal de la información es de **5 años**, en virtud de ser el promedio en que tarda en causar estado una sentencia emitida en procedimientos judiciales.

Clasificación de la información: Confidencial.

- **Causal de clasificación prevista en el artículo 113, fracción I⁶¹, de la LFTAIP.**

Al respecto, en lo concerniente a: emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad relacionados con las personas físicas identificadas plenamente en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, en caso de que existieran, se comunica que dicha información se encuentra clasificada como **CONFIDENCIAL**, de conformidad con lo establecido en los artículos 116⁶², de la LGTAIP y 113, fracción I⁶³, de la LFTAIP.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por la normativa en materia de transparencia y acceso a la información, le comunico que conforme al cuadro que a continuación se acompaña, se determina su clasificación, en los siguientes términos:

⁵⁹ Transcrito con anterioridad.

⁶⁰ Transcrito con anterioridad.

⁶¹ Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

[...]

⁶² Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

⁶³ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024
Folio: 330027724002869
RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Información	Clasificación
Pronunciamiento respecto de la existencia de carpetas de investigación relacionadas con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud.	Confidencial. – Datos personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables, lo anterior conforme a los artículos 113, fracción I ⁶⁴ , de la LFTAIP y 116 ⁶⁵ de la LGTAIP.

En ese sentido, la información descrita en el cuadro inserto anterior, se clasifica como confidencial de conformidad con los artículos 100⁶⁶, 106, fracción I⁶⁷ y 116⁶⁸, de la LGTAIP, 97⁶⁹, 98, fracción I⁷⁰, 113, fracción I⁷¹, de la LFTAIP; así como los Lineamientos Cuarto⁷², Quinto⁷³, Séptimo, fracción I⁷⁴, Octavo⁷⁵, Trigésimo octavo, fracción I, numerales 1, 6 y 7⁷⁶ y Cuadragésimo⁷⁷, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Para tal efecto, con la intención de conocer el marco normativo relativo a la clasificación de datos personales, se trae a colación la LFTAIP, que en la parte que interesa señala:

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

...
Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente Ley.

⁶⁴ Transcrito con anterioridad.

⁶⁵ Transcrito con anterioridad.

⁶⁶ **Artículo 100.** La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlos.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.

⁶⁷ Transcrito con anterioridad.

⁶⁸ Transcrito con anterioridad.

⁶⁹ Transcrito con anterioridad.

⁷⁰ Transcrito con anterioridad.

⁷¹ Transcrito con anterioridad.

⁷² **Cuarto.** Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

⁷³ **Quinto.** La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.

⁷⁴ **Séptimo.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

(...)

⁷⁵ **Octavo.** Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender el análisis de la prueba del daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

⁷⁶ **Trigésimo octavo.** Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:

I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se puede identificar de acuerdo a las siguientes categorías:
1. Datos identificativos: El nombre, alias, pseudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Elector, Matricula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos.

(...)

6. Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles de su propiedad, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas, inversiones, seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, beneficiarios, dependientes económicos, decisiones patrimoniales y análogos.

7. Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos;

(...)

⁷⁷ **Cuadragésimo.** En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizarse este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que únicamente le incumba a su titular, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actos de asamblea.



Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en la Ley General.

Artículo 17. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución, la Ley General, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

...

Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

II. Por ley tenga el carácter de pública;

III. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

Por su parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, señalan lo siguiente:

Primero. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

...

"Trigésimo Octavo. Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:

I. Los **datos personales** entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se puede identificar de acuerdo a las siguientes categorías:

1. Datos identificativos: El nombre, alias, pseudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población [CURP], Clave de Elector, Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos.

{...}

6. Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles de su propiedad, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

privadas, inversiones, seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, beneficiarios, dependientes económicos, decisiones patrimoniales y análogos.

7. Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos;
[...]

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los integrantes de los sujetos obligados facultados para ello.

Para el tratamiento de datos biométricos, los sujetos obligados deberán de implementar los sistemas biométricos que sean necesarios para su debida utilización y protección."

En este sentido, es importante dejar establecido que un **dato personal** es toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable y, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, su información patrimonial o jurídica.

Asimismo, refieren aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de sus características físicas, información fiscal o situación legal, entre otros.

Conforme a los preceptos transcritos, en el ejercicio del derecho de acceso a la información se protegerá la vida privada y los datos personales; es decir, entre los límites o excepciones del derecho de acceso a la información, se encuentra la protección de los datos personales que obren en archivos gubernamentales, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

Por ello, en la LFTAIP se establece como una limitante al derecho de acceso a la información, la documentación que se considere confidencial.

Sin embargo, para que determinada información se clasifique con ese carácter, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I⁷⁸, de la Ley citada, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que se trate de **datos personales**. Esto es:

a) Información concerniente a una **persona**, y

b) Que ésta sea identificada o identificable.

2. Que para la difusión de los datos se requiera el **consentimiento** del titular. Por regla general, se requiere de dicho consentimiento; sin embargo, se prescinde de éste cuando la difusión esté prevista en ley. En consecuencia, este requisito se satisface si no se acredita la obligación legal de difundir la información, y

⁷⁸ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

3. Que no sea información que obre en registros públicos o en fuentes de acceso público.

En ese contexto, la información relativa al pronunciamiento respecto de requisitos de procedibilidad relacionados con las personas físicas identificadas plenamente en la solicitud, así como las carpetas de investigación, en caso de que existieran, comprende información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, por lo que se trata de datos personales clasificados como confidenciales, de conformidad con el artículo 113, fracción I⁷⁹, de la LFTAIP.

- Causal de clasificación prevista en el artículo 113, fracción III⁸⁰, de la LFTAIP.

Al respecto, en lo concerniente a: emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad en contra de la persona moral identificada plenamente en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, se comunica que dicha información se encuentra clasificada como **CONFIDENCIAL**, de conformidad con lo establecido en los artículos 113, fracción III⁸¹, de la LFTAIP y 116⁸², de la LGTAIP.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por la normativa en materia de transparencia y acceso a la información, le comunico que conforme al cuadro que a continuación se acompaña, se determina su clasificación, en los siguientes términos:

Información	Clasificación
Pronunciamiento respecto de la existencia de carpetas de investigación en contra de la persona moral plenamente identificada en la solicitud.	Confidencial. – Datos personales concernientes a personas morales, así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, lo anterior conforme a los artículos 113, fracción III ⁸³ , de la LFTAIP y 116 ⁸⁴ de la LGTAIP.

En ese sentido, la información descrita en el cuadro inserto anterior, se clasifica como confidencial de conformidad con los artículos 100⁸⁵, 106, fracción I⁸⁶ y 116⁸⁷, de la LGTAIP, 97⁸⁸, 98, fracción I⁸⁹, 113, fracción III⁹⁰, de la LFTAIP; así como los Lineamientos Cuarto⁹¹, Quinto⁹², Séptimo, fracción I⁹³, Octavo⁹⁴, Trigésimo

⁷⁹ Transcrito con anterioridad.

⁸⁰ Artículo 113. Se considera información confidencial:

[...]

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

⁸¹ Transcrito con anterioridad.

⁸² Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

⁸³ Transcrito con anterioridad.

⁸⁴ Transcrito con anterioridad.

⁸⁵ Transcrito con anterioridad.

⁸⁶ Transcrito con anterioridad.

⁸⁷ Transcrito con anterioridad.

⁸⁸ Transcrito con anterioridad.

⁸⁹ Transcrito con anterioridad.

⁹⁰ Transcrito con anterioridad.

⁹¹ Transcrito con anterioridad.

⁹² Transcrito con anterioridad.

⁹³ Transcrito con anterioridad.

⁹⁴ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

octavo, fracción II⁹⁵ y Cuadragésimo⁹⁶, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Por lo que hace a los datos personales de las **personas morales** como es su situación penal, el fundamento legal aplicable corresponde a la fracción III⁹⁷, del artículo 113, de la Ley en cita, ya que las personas morales, al igual que las personas físicas, tienen cierta información que, como en el caso de los datos personales, se ubica en el ámbito de lo privado.

En cuanto a datos de personas morales se refiere, la fracción III, del artículo 113⁹⁸, de la LFTAIP lo siguiente:

"Artículo 113. Se considera información confidencial:

...

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

..."

En el mismo sentido, los Lineamientos generales⁹⁹ establecen lo siguiente:

"TRIGESIMO OCTAVO. Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:

...

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y

...

CUADRAGÉSIMO. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que únicamente le incumba a su titular, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

⁹⁵ Trigésimo octavo. Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:

[...]

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y

[...]

⁹⁶ Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que únicamente le incumba a su titular, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

⁹⁷ Transcrito con anterioridad.

⁹⁸ Transcrito con anterioridad.

⁹⁹ Transcrito con anterioridad.

**Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria**

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Es menester señalar que el derecho a la intimidad, objeto de protección de los datos personales, se encuentra previsto en los artículos 6º, apartado A, fracción II¹⁰⁰ y 16¹⁰¹, de la CPEUM, y consiste en el derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio, posesiones o correspondencia, mismo que puede ser materializado a través de la protección de datos personales en el ámbito de la información pública.

En este sentido, el artículo 1º¹⁰² Constitucional dispone que todas las personas, sin limitar a físicas o morales, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia Carta Magna autoriza.

Asimismo, se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución Federal, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en tanto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. De lo señalado, se observa que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011, tiene por objeto garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Al respecto, si bien en el artículo 1º¹⁰³ de la CPEUM señala el término personas, lo cierto es que dicho concepto debe interpretarse de manera amplia a las personas jurídicas en los casos en que ello sea aplicable.

En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 360/2013 señaló que deben aplicarse a la persona jurídica aquellos derechos fundamentales que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad, como se observa de la siguiente transcripción:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 21 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

[...]

¹⁰⁰ Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[...]

¹⁰¹ Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

[...]

¹⁰² Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

¹⁰³ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Resolución

El 21 de abril de 2014, el Tribunal en Pleno de la SCJN analizó el proyecto que presentó la Ministra ponente en el que se consideró existente la contradicción de criterios denunciada, al estimar que los tribunales colegiados involucrados se ocuparon de la misma cuestión jurídica arribando a conclusiones diversas.

Por otra parte, en relación con la cuestión de fondo, se propuso **reconocer que las personas jurídicas sí son titulares de derechos fundamentales, pero no de todos, sino sólo de aquellos que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.**

Es decir, las personas jurídicas, no podrán gozar de los derechos humanos que presupongan características intrínsecas o naturales del hombre.

De esta manera, el Pleno de la SCJN resolvió la presente Contradicción de Tesis por unanimidad de votos a favor de la propuesta presentada; sin embargo siendo que cada Ministro tenía sus propias consideraciones respecto del proyecto, la Ministra Ponente aceptó matizar y suprimir algunas partes de la propuesta, así como agregar el precedente de la tesis aislada derivada de la Contradicción de Tesis 56/2011, "PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE", para circular el engrose y ser avalado por cada Ministro posteriormente.

Puntos Resolutivos

PRIMERO. Existe la contradicción de tesis denunciada entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del último considerando de la presente resolución.
Votos

Ministra Ponente: LUNA.

Se resolvió la presente Contradicción de Tesis por unanimidad de votos de los Ministros PÉREZ, COSSÍO, LUNA, FRANCO, ZALDÍVAR, PARDO, AGUILAR, VALLS, SÁNCHEZ CORDERO, GUTIÉRREZ y Presidente SILVA, a favor del sentido del proyecto, con la reserva para formular en su caso voto concurrente de los Ministros GUTIERREZ, COSSÍO, ZALDÍVAR y VALLS; y, con el anuncio de voto concurrente del Ministro FRANCO."

Énfasis añadido

Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal, en la Contradicción de Tesis 56/2011, la cual si bien no tuvo por materia resolver sobre la titularidad de derechos fundamentales de las personas morales, como premisa previa a la solución de la contradicción ahí planteada; lo cierto es que se apuntó que cuando el artículo 1º¹⁰⁴ de la Constitución alude al vocablo persona se entiende de principio referido al ser humano, precisamente como sujeto de quien se predica el reconocimiento de derechos humanos, esto es, inherentes a la condición humana y su dignidad intrínseca, lo que, sin duda, no puede atribuirse a las personas jurídicas colectivas; no obstante, ello no significa que éstas no gocen del reconocimiento y, por ende, la garantía de su protección, de ciertos derechos fundamentales, como se aprecia de lo siguiente:

¹⁰⁴ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

"CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 30 DE MAYO DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: LAURA GARCÍA VELASCO Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
[...]

Efectivamente, si bien, cuando el artículo 1o. de la Constitución alude a "persona" se entiende de principio referido al ser humano, precisamente como sujeto de quien se predica el reconocimiento de derechos humanos, esto es, inherentes a la condición humana y a su dignidad intrínseca, lo que, sin duda, no puede atribuirse a las personas jurídicas colectivas, ello no significa que éstas no gocen del reconocimiento y, por ende, de la garantía de su protección, de ciertos derechos fundamentales.

Lo anterior, porque, en primer lugar, dicho numeral 1o. no distingue expresamente entre persona natural y persona jurídica, en segundo lugar, como se ha aceptado en derecho comparado, las personas morales sí gozan de la protección de ciertos derechos fundamentales, ya sea porque se trata de asociaciones de personas físicas o porque éstas necesariamente las representan y, por ende, no aceptar que aquéllas son titulares de derechos fundamentales negaría a los individuos que las conforman la protección de sus propios derechos;[1] o en razón de que, constitucional y legalmente, las personas morales son titulares de derechos y obligaciones y/o deberes que, indefectiblemente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad, como el de propiedad, de asociación, de petición, de acceso a la justicia, etcétera. Es decir, las personas colectivas tienen, por sí mismas, la titularidad de determinados derechos, más allá de las personas que las conforman.[2]

[...]"

Lo anterior, en virtud de que, en primer lugar, el referido precepto constitucional no distingue expresamente entre persona natural y persona jurídica; en segundo lugar, como se ha aceptado en derecho comparado, las personas morales sí gozan de la protección de ciertos derechos, ya sea porque se trata de asociaciones de personas físicas o porque éstas necesariamente las representan y, por ende, no aceptar que aquéllas son titulares de derechos fundamentales negaría a los individuos que las conforman la protección de sus propios derechos; o en razón de que, constitucional y legalmente, las personas morales son titulares de derechos y obligaciones y/o deberes que, ineludiblemente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad, como el de propiedad, asociación, petición, acceso a la justicia, entre otros.

Por lo cual, se advierte que entre la información que pueda ser considerada como confidencial se encuentra aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, ello en razón de que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere como clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad.

Aunado a lo anterior, emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad en contra de la persona moral identificada plenamente en la solicitud, así como, las carpetas de investigación, en el caso de que existieran, es posible asociar a la persona con la existencia de alguna investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a la persona moral con algún hecho posiblemente delictivo y que no cuente con una sentencia firme, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulneraría la presunción de inocencia, al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia.

En tal virtud, no es posible divulgar la información de personas morales que intervengan o se vincule con una investigación, máxime que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal.

Así, debe decirse que el derecho a la protección de datos personales puede extenderse a cierta información de las personas morales o jurídicas, pues éstas cuentan con un ámbito de derechos equiparables a los datos de las personas físicas, sobre todo cuando se trata de intromisiones arbitrarias por parte de terceros, respecto de cierta información económica, comercial, que de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.

A manera de analogía, ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. II/2014 (10a.), registro digital 2005522, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 3, en febrero de 2014, Tomo I, página 274, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD.

El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas."

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a.XLII/2020 (10a.), registro digital 2022198, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, octubre 2020, Tomo I, página 277, ha señalado lo siguiente:

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PUEDE SER CONSIDERADA LA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CONTENGA LOS DATOS SOBRE SU DOMICILIO,



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

SUS COMUNICACIONES, O CIERTOS INFORMES ECONÓMICOS, COMERCIALES Y AQUELLOS INHERENTES A SU IDENTIDAD QUE DEBEN ESTAR PROTEGIDOS FRENTE A INTROMISIONES ILEGÍTIMAS.

Hechos: En un procedimiento administrativo seguido a una empresa por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica [COFECE], se emitió una resolución mediante la que se sancionó a la misma por haberse estimado la comisión de prácticas económicas absolutas; dicha empresa reclamó en amparo indirecto la versión pública de la resolución de mérito, mediante la que se ordenó la publicación y difusión de sus datos de identificación, por haberse tratado de una persona jurídica; así como lo establecido en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al haber estimado que resultaba inconstitucional al sólo proteger la información que contuviera los datos de identificación de las personas físicas, y no así los de las personas jurídicas, como era su caso.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que del contenido literal de la porción normativa en comento, que establece como información confidencial aquella que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no se advierte que excluya expresamente de esa tutela a las personas jurídicas en cuanto a su domicilio y sus comunicaciones, o bien, ciertos informes económicos, comerciales o inherentes a su identidad que, de suyo, sí deben estar protegidos frente a intromisiones ilegítimas.

Justificación: Lo que se obtiene de la norma no explicitada, derivada de lo establecido en el diverso ordenamiento al que, precisamente, se debe tal disposición, por deferencia jerárquica, es decir, por virtud del entendimiento que confiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, respecto a que los datos que se consideran confidenciales son los concernientes a cualquier persona en términos amplios, esto es, tanto a las físicas como a las jurídicas. Además, en atención al principio pro persona, al que hacen alusión tanto el artículo 1o. constitucional como la parte final del artículo 6 de la aludida Ley General, de los posibles significados que puedan atribuírsele a la fracción I del artículo 113 en cuestión, el que mayor beneficio genera es aquel que no acota la protección de datos confidenciales a un tipo de persona, sino a las personas físicas y jurídicas, en términos generales. Sin que lo anterior exima de la posibilidad de ponderar la protección de los datos confidenciales de las personas jurídicas, con la posibilidad de conculcar los derechos de terceros.

Amparo en revisión 884/2018. 15 de mayo de 2019. Cinco votos de los de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles."

Por tanto, se ha reconocido que el derecho a la protección de los datos personales no excluye la tutela de aquellos concernientes a las personas jurídicas o morales, como son el domicilio, las comunicaciones, informes económicos, comerciales o inherentes a su identidad, los cuales deben estar protegidos ante cualquier intromisión ilegítima por parte de terceros.

Si bien es cierto que el solicitante requirió conocer información respecto de la existencia de procedimientos penales en contra de la persona moral plenamente identificada, lo cierto es que, para localizar esa información se tendría que ubicar el o las carpetas de investigación en los que esa persona se encuentra involucrada, lo que evidentemente ocasionaría la vinculación de su identidad con asuntos penales, con la consecuente vulneración al **derecho a la privacidad**.

En ese tenor, se advierte que emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad, así como carpetas de investigación en contra de la persona moral cuya denominación o razón social, o bien, el nombre comercial u homólogo, sea identificado por el propio solicitante, implicaría dar a conocer la situación jurídica en la que se encuentra, afectando con ello su ámbito privado de derechos,



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

pues se trata de información que incide en su ámbito económico y comercial que, de difundirse, podría generar juicios de valor negativos sobre dicha persona y su actuar, con un posible daño a sus negociaciones

Aunado a lo anterior, la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.

En suma, al tratarse de datos personales de personas morales, actualizan la clasificación como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracción III¹⁰⁵, de la Ley de la materia, pues dicha información no puede ser hecha del conocimiento público, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los titulares de la información, situación que no acontece en el presente caso.

Segundo. Por lo que respecta a lo solicitado, la **Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF)** turnó su solicitud para la atención de la **Administración Central de Análisis Técnico Fiscal (ACATF)**, autoridad que de conformidad con el artículo 23, primer párrafo, apartado B, en concordancia con el artículo 22, primer párrafo, fracciones XIX, XXXIII y XXXIV, del RISAT en vigor, en virtud que tales disposiciones resultan aplicables para determinar la competencia de esa unidad administrativa, y que se transcriben a continuación:

***Artículo 22.-** Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal:

[...]

XIX. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha autoridad, en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas actuaciones;

[...]

XXXIII. Obtener la información, documentación o pruebas necesarias para que las autoridades competentes formulen al Ministerio Público la denuncia, querrela o declaratoria de que el Fisco Federal haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar información con otras autoridades fiscales;

XXXIV. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos a que se refiere el Código Penal Federal respecto de las atribuciones de dicha Unidad de Inteligencia Financiera;

[...]"

***Artículo 23.-** Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ejercer las atribuciones que a continuación se señalan:

[...]

B. A la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente:

I. Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX del artículo 22 de este Reglamento, y

¹⁰⁵ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

II. Administraciones de Análisis Técnico Fiscal "1", "2", "3", "4" y "5", las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX del artículo 22 de este Reglamento; [...]"

(Énfasis añadido)

Análisis.

Acorde a lo anterior, y con relación a lo solicitado consistente en: "...SABER SI YA ES INVESTIGADA ESTA EMPRESA POR TODOS LOS ILÍCITOS QUE SE DISFRAZAN COMO "EMPRESA RESPONSABLE Y QUE DAN EMPLEO" O PODRÍA PROPORCIONAR SI YA HAY UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN", la ACATF hace de su conocimiento que, conforme a lo establecido en el artículo 30-A, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad competente para formular o no el requisito de procedibilidad al que alude el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, es la Dirección General de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así también, es importante señalar que lo solicitado recae el ámbito de facultades de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien le compete realizar las investigaciones judiciales, la apertura de carpetas de investigación, determinar el ejercicio de la acción penal, así como solicitar el arresto de personas, por lo que serían esas autoridades que podría conocer lo solicitado; en esa tesitura, se sugiere ingresar su solicitud de acceso a la información a la Unidad de Transparencia de dicha Secretaría y de la Fiscalía General de la República, a través de la PNT:

<https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio>

Modalidad de entrega.

La modalidad de entrega elegida por usted es: a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fundamento.

Lo anterior, tiene su fundamento en los artículos 100¹⁰⁶, 103¹⁰⁷, 104¹⁰⁸, 106, fracción I¹⁰⁹, 107¹¹⁰, 113, fracciones VII, XII y XIII¹¹¹, 114¹¹² y 116¹¹³, de la LGTAIP; 97¹¹⁴, 98, fracción I¹¹⁵, 100¹¹⁶, 102¹¹⁷, 103¹¹⁸, 105¹¹⁹, 110, fracciones VII, XII y XIII¹²⁰, 111¹²¹, 113, fracciones I y III¹²², 131, segundo párrafo¹²³ y 140¹²⁴, de la LFTAIP; lineamientos Cuarto¹²⁵, Quinto¹²⁶, Séptimo, fracción I¹²⁷, Octavo¹²⁸, Vigésimo sexto¹²⁹, Trigésimo primero¹³⁰, Trigésimo segundo¹³¹,

¹⁰⁶ Transcrito con anterioridad.

¹⁰⁷ Transcrito con anterioridad.

¹⁰⁸ Transcrito con anterioridad.

¹⁰⁹ Transcrito con anterioridad.

¹¹⁰ Transcrito con anterioridad.

¹¹¹ Transcrito con anterioridad.

¹¹² Transcrito con anterioridad.

¹¹³ Transcrito con anterioridad.

¹¹⁴ Transcrito con anterioridad.

¹¹⁵ Transcrito con anterioridad.

¹¹⁶ Transcrito con anterioridad.

¹¹⁷ Transcrito con anterioridad.

¹¹⁸ Transcrito con anterioridad.

¹¹⁹ Transcrito con anterioridad.

¹²⁰ Transcrito con anterioridad.

¹²¹ Transcrito con anterioridad.

¹²² Transcrito con anterioridad.

¹²³ Transcrito con anterioridad.

¹²⁴ Transcrito con anterioridad.

¹²⁵ Transcrito con anterioridad.

¹²⁶ Transcrito con anterioridad.

¹²⁷ Transcrito con anterioridad.

¹²⁸ Transcrito con anterioridad.

¹²⁹ Transcrito con anterioridad.

¹³⁰ Transcrito con anterioridad.

¹³¹ Transcrito con anterioridad.

[...] Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

¹³⁴ Transcrito con anterioridad.

¹³⁵ Transcrito con anterioridad.

¹³⁶ Transcrito con anterioridad.

¹³⁷ Transcrito con anterioridad.

¹³⁸ Transcrito con anterioridad.

¹³⁹ Transcrito con anterioridad.

¹⁴⁰ Transcrito con anterioridad.

¹⁴¹ Transcrito con anterioridad.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Trigésimo tercero¹³², Trigésimo cuarto¹³³, Trigésimo octavo, fracciones I, numerales 1, 2 y 7 y II¹³⁴ y Cuadragésimo¹³⁵, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y en el criterio SO/013/2017¹³⁶, emitido por el INAI.

Procedimiento de impugnación.

Finalmente, es menester señalar que, en caso de no estar de acuerdo con la respuesta proporcionada a su solicitud de información, podrá interponer recurso de revisión ante el INAI, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la presente respuesta, de conformidad con lo establecido en los artículos 142¹³⁷ de la LGTAIP y 147¹³⁸ de la LFTAIP. [...]” (sic)

CONSIDERANDO

1. **Competencia.** El CTSAT es competente para conocer y resolver la presente clasificación de información, así como la declaración de incompetencia manifestada por la unidad administrativa, en términos de los artículos 6-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]; 64, 65, fracción II, 102, primer párrafo y 131, segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LFTAIP]; 2, fracción XX, 3, 4, último párrafo, 8, tercer párrafo, 10, 15, fracción II y 25, del Procedimiento en materia de Acceso a la información y Transparencia del Servicio de Administración Tributaria y lineamiento Vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información.

2. **Clasificación de la información solicitada: RESERVADA**

2.1. **Unidad administrativa que clasifica:** La AGJ a través de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales.

2.1.1. **Análisis de la Información clasificada:** Pronunciamiento respecto de la existencia de carpetas de investigación en contra de la persona moral o relacionadas con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud.

2.1.2. **Fundamentación y motivación de la clasificación de la información:** Artículos 100, 103, 104, 106, fracción I, 107, 113, fracciones VII, XII y XIII y 114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGTAIP]; 97, 98, fracción I, 100, 102, 103, 105, 110, fracciones VII, XII y XIII, 111 y 140, de la LFTAIP; lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Vigésimo sexto,

¹³² Transcrito con anterioridad.

¹³³ Transcrito con anterioridad.

¹³⁴ Transcrito con anterioridad.

¹³⁵ Transcrito con anterioridad.

¹³⁶ Transcrito con anterioridad.

¹³⁷ Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la

solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

¹³⁸ Artículo 147. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa por escrito, por correo con porte pagado o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya

conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. Deberán preverse mecanismos accesibles para personas con discapacidad.

Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte una comunicación clara y precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena, se procurará proporcionarles gratuitamente un traductor o intérprete.

En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

Asimismo, cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad ante la Unidad de Transparencia, dicha circunstancia deberá ser notificada al organismo garante, para que determine mediante acuerdo los ajustes razonables que garanticen la tutela

efectiva del derecho de acceso a la información.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Trigésimo primero, Trigésimo segundo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

En tal virtud, tocante a la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción VII, de la LGTAIP y 110, fracción VII, de la LFTAIP, se aludió que, se acredita que la difusión de la información requerida obstruye la persecución de los delitos, pues obstaculiza las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, incluso puede menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Es así que se justifica el supuesto de reserva, dado que se actualizan los elementos precisados en el numeral Vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, conforme a lo siguiente:

En el supuesto no concedido de que se hubieran presentado requisitos de procedibilidad con las características que se precisan en la solicitud, se trataría de requisitos que se presentan ante la Fiscalía General de la República (FGR) sustentados con información proporcionada por el SAT, que llega a formar parte de las carpetas de investigación, en el caso de que existieran, a cargo del Agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que se acreditaría la existencia de carpetas de investigación en trámite, en las que se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba que conllevan el sustento del ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

Así, de proporcionarse lo requerido, se permitirá identificar las carpetas de investigación en trámite, en el caso de que existieran, por lo que se acreditaría el vínculo que concurriría entre la información solicitada y las carpetas de investigación abiertas con motivo de los requisitos de procedibilidad presentados por el SAT.

Asimismo, en cuanto a la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción XII, de la LGTAIP y 110, fracción XII, de la LFTAIP, se apuntó que, debe señalarse que, en virtud de la clasificación del pronunciamiento respecto de requisitos de procedibilidad presentados ante la FGR, en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas o plenamente identificadas en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, en el supuesto no concedido de que existieran, en principio, dicha información revestiría el carácter de reservada, ya que su difusión permitiría identificar carpetas de investigación correspondientes a requisitos de procedibilidad presentados por el SAT, las cuales están siendo integradas por el Ministerio Público de la Federación y contienen los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que se acreditan los requisitos establecidos por el numeral Trigésimo primero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

Por lo que se refiere a la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción XIII, de la LGTAIP y artículo 110, fracción XIII, de la LFTAIP, se indicó que, conforme el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales [CNPP] los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados y únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos.

En ese sentido, la información relativa a los registros que permitan identificar las carpetas de investigación, se encuentra reservada por ministerio del Código Nacional citado, por lo que se cumple con el requisito señalado en el numeral Trigésimo segundo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, la reserva respecto de emitir pronunciamiento sobre la existencia de requisitos de procedibilidad en contra de la persona moral o relacionados con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud, y en su caso, las carpetas de investigación, en el supuesto no concedido de que existieran; se trata de información contenida en los requisitos de procedibilidad presentados ante la FGR y se relacionan con las carpetas de investigación que dieron origen a las mismas, es proporcional y adecuada al interés público, consistente en que el Estado Mexicano prevenga, investigue, persiga y castigue los delitos que lesionan de manera grave los bienes jurídicos de las personas por lo cual, se puede determinar la razonabilidad de la restricción al Derecho Humano de acceso a la información pública.

Bajo ese tenor, de dar a conocer la información contenida en las carpetas de investigación, se generaría un riesgo de perjuicio, pues se vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente, ya que, bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al investigado o a sus cómplices, o bien, provocar alteración o destrucción de los objetos del delito, que se encuentren relacionados con las carpetas de investigación, o realizar acciones que puedan entorpecerlas.

Es así que la reserva manifestada atiende a un interés jurídico superior para toda la sociedad, y supera el interés particular de acceso del solicitante, pues como ya se mencionó, la información requerida constituye los datos que podrían identificar las carpetas de investigación que corresponden a denuncias presentadas, que se tramitan ante el Ministerio Público de la Federación, en el supuesto no concedido de que existieran, por lo que prevalece el interés fiscal de la Federación.

2.1.3. Periodo de reserva: 5 años.



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

3. Clasificación de la información solicitada: **CONFIDENCIAL**

3.1. Unidad administrativa que clasifica: La AGJ a través de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales.

3.1.1. Análisis de la Información clasificada: Pronunciamiento respecto de la existencia de carpetas de investigación relacionadas con las personas físicas plenamente identificadas en la solicitud.

3.1.2. Fundamentación y motivación de la clasificación de la información: Artículos 100, 103, 106, fracción I y 116, de la LGTAIP; 97, 98, fracción I, 102, 103, 113, fracción I y 140, de la LFTAIP; lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Trigésimo octavo, fracción I, numerales 1, 6 y 7 y Cuadragésimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Al respecto, se puntualizó que, un dato personal es toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable y, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, su información patrimonial o jurídica.

Asimismo, refieren aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de sus características físicas, información fiscal o situación legal, entre otros.

Sin embargo, se especificó que, para que determinada información se clasifique con ese carácter, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Que se trate de datos personales. Esto es: a) Información concerniente a una persona, y b) Que ésta sea identificada o identificable. 2. Que para la difusión de los datos se requiera el consentimiento del titular. Por regla general, se requiere de dicho consentimiento; sin embargo, se prescinde de éste cuando la difusión esté prevista en ley. En consecuencia, este requisito se satisface si no se acredita la obligación legal de difundir la información, y 3. Que no sea información que obre en registros públicos o en fuentes de acceso público.

En ese contexto, se indicó que, la información relativa al pronunciamiento respecto de requisitos de procedibilidad relacionados con las personas físicas identificadas plenamente en la solicitud, así como las carpetas de investigación, en caso de que existieran, comprende información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, por lo que se trata de datos personales clasificados como confidenciales, de conformidad con el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP.

3.2. Unidad administrativa que clasifica: La AGJ a través de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales.

3.2.1. Análisis de la Información clasificada: Pronunciamiento respecto de la existencia de carpetas de investigación en contra de la persona moral plenamente identificada en la solicitud.



3.2.2. Fundamentación y motivación de la clasificación de la información: Artículos 100, 103, 106, fracción I y 116, de la LGTAIP; 97, 98, fracción I, 102, 103, 113, fracción III y 140, de la LFTAIP; lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

En el presente caso, se precisó que, por lo que hace a los datos personales de las personas morales como es su situación penal, el fundamento legal aplicable corresponde a la fracción III, del artículo 113, de la Ley en cita, ya que las personas morales, al igual que las personas físicas, tienen cierta información que, como en el caso de los datos personales, se ubica en el ámbito de lo privado.

En este sentido, se indicó que, el artículo 1º Constitucional dispone que todas las personas, sin limitar a físicas o morales, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia Carta Magna autoriza.

Asimismo, se puntualizó que, se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución Federal, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en tanto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. De lo señalado, se observa que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011, tiene por objeto garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Al respecto, si bien en el artículo 1º de la CPEUM se señala el término personas, lo cierto es que dicho concepto debe interpretarse de manera amplia a las personas jurídicas en los casos en que ello sea aplicable.

Por lo cual, se advierte que entre la información que pueda ser considerada como confidencial se encuentra aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, ello en razón de que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere como clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad.



Aunado a lo anterior, emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad en contra de la persona moral identificada plenamente en la solicitud, así como, las carpetas de investigación, en el caso de que existieran, es posible asociar a la persona con la existencia de alguna investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a la persona moral con algún hecho posiblemente delictivo y que no cuente con una sentencia firme, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulneraría la presunción de inocencia, al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia.

En tal virtud, no es posible divulgar la información de personas morales que intervengan o se vincule con una investigación, máxime que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal.

En ese tenor, se advierte que emitir pronunciamiento respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad, así como carpetas de investigación en contra de la persona moral cuya denominación o razón social, o bien, el nombre comercial u homólogo, sea identificado por el propio solicitante, implicaría dar a conocer la situación jurídica en la que se encuentra, afectando con ello su ámbito privado de derechos, pues se trata de información que incide en su ámbito económico y comercial que, de difundirse, podría generar juicios de valor negativos sobre dicha persona y su actuar, con un posible daño a sus negociaciones.

Aunado a lo anterior, la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.

En suma, al tratarse de datos personales de personas morales, actualizan la clasificación como información confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracción III, de la Ley de la materia, pues dicha información no puede ser hecha del conocimiento público, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los titulares de la información, situación que no acontece en el presente caso.

4. Declaratoria de **INCOMPETENCIA**

4.1. Unidad administrativa que declara la incompetencia: La AGJ a través de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales.

4.1.1. Análisis de la Información de la que se declara la incompetencia: "[...] SI YA ES INVESTIGADA ESTA EMPRESA POR TODOS LOS ILÍCITOS QUE SE DISFRAZAN COMO "EMPRESA RESPONSABLE Y QUE DAN EMPLEO" [...]" [sic]



Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

4.1.2. Fundamentación de la declaración de incompetencia manifestada: Artículos 131, segundo párrafo, de la LFTAIP y el Criterio de Interpretación SO/013/2017 “Incompetencia”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En tal virtud, se informa que la AGJ no es competente para investigar los hechos constitutivos de delito, por lo que no es posible proporcionar la información solicitada.

En ese orden de ideas, se advierte que el marco normativo que regula las atribuciones conferidas a dicha Administración General, no contempla la generación de la información referente al rubro que requiere el solicitante, por lo tanto, la elaboración y procesamiento de dicha información no deriva del ejercicio de facultades inherentes a la AGJ, en consecuencia, resulta incompetente para atender la solicitud de acceso a la información referida.

En ese contexto, con el ánimo de coadyuvar a la transparencia y en aras de garantizar el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad de la información, se hizo del conocimiento que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República, corresponde al Ministerio Público de la Federación de la FGR, la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales; por lo que le sugirió canalizar el requerimiento a la UT de la FGR; en tal virtud se proporcionaron los datos de contacto correspondientes.

Por lo antes expuesto y fundado se,

RESUELVE

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como reservada, confidencial, así como la declaración de incompetencia manifestada de conformidad con los artículos 65, fracción II, 131, segundo párrafo y 140, fracción I, de la LFTAIP, en los términos de lo señalado en los apartados 2. al 4.1.2., de los Considerandos de la presente resolución.

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, para su conocimiento y efectos legales, y hágase de su conocimiento que le asiste el derecho a interponer recurso de revisión ante el INAI, de conformidad con lo previsto en los artículos 147 y 148, de la LFTAIP.



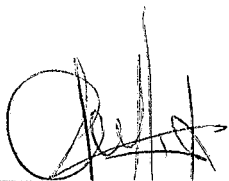
Comité de Transparencia del Servicio de
Administración Tributaria

CTSAT 1045/2024

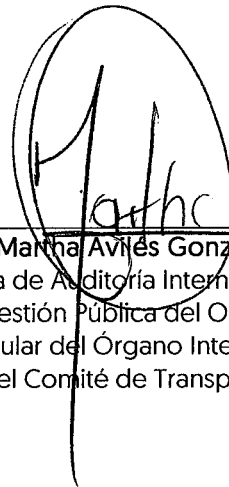
Folio: 330027724002869

RESERVADA/CONFIDENCIAL/INCOMPETENCIA

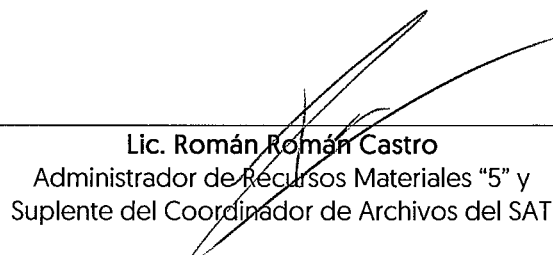
Así, por UNANIMIDAD DE VOTOS, lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria.



Mtra. Andrea Yoalli Hernández Xoxotla
Administradora General de Servicios al
Contribuyente, Titular de la Unidad de
Transparencia del SAT y Presidenta del CTSAT



C.P. Martha Avilés González
Titular del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública del OICE en el SAT y
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control
Específico ante el Comité de Transparencia del SAT



Lic. Román Román Castro
Administrador de Recursos Materiales "5" y
Suplente del Coordinador de Archivos del SAT

